

Ex militar prófugo se había convertido en jefe paramilitar

Muerto cerebro del crimen de Alex Lopera

El ex mayor del Ejército David Hernández Rojas estaba prófugo de la justicia desde el 26 de junio de 1999. Ayer fue abatido por el Ejército. Era el jefe del frente «Mártires del Valle del Cacique Upar» y el segundo de «Jorge 40».

David Hernández Rojas, uno de los militares que en marzo de 1999 asesinaron al asesor de paz de Antioquia Alex Oriol Lopera Díaz, y quien a la postre se convirtió en jefe del frente «Mártires del Valle del Cacique Upar», fue abatido ayer por el Ejército junto con tres de sus hombres en un combate ocurrido en La Mesa, al norte de Valledupar, departamento del Cesar.

Hernández Rojas, conocido como «39», era el segundo de «Jorge 40», jefe de las AUC, y operaba en una amplia región del Cesar, La Guajira y otros departamentos de la Costa Atlántica.

Sobre Hernández pesaban doce órdenes de captura emanadas de distintos fiscales y por distintos delitos.

Además, había sido condenado, como reo ausente, a 50 años de prisión por homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y falso testimonio, tras ser hallado culpable junto con otros militares de los asesinatos de Alex Lopera Díaz y los comercian-

tes Manuel José Jaramillo Giraldo y Luis Fernando Londoño Gómez, el 11 de marzo de 1999, cuando Hernández era mayor del Ejército y comandaba el Batallón de Contraguerrilla No 4, Granaderos.

Asesinato de Lopera

El 10 de marzo de 1999, Alex Lopera, entonces asesor de paz de Antioquia, partió en una misión humanitaria de Medellín hacia Argelia acompañado de Luis Fernando Londoño Gómez y Manuel José Jaramillo Giraldo. Llevaban \$150 millones en efectivo para pagarle a un grupo guerrillero el rescate de la tecnología Patricia Jaramillo Giraldo, hermana de Manuel José y secuestrada cinco meses atrás.

Hacia las 2 p.m., Lopera y sus compañeros fueron detenidos en un retén militar, en la carretera Sonsón-Argelia. Según Fabiola Díaz, madre de Lopera, éste la llamó a las 2 a.m. del 11 de marzo, diciéndole que estaban bien.

Fue lo último que supo de

David Hernández Rojas

ellos hasta que, ocho días después, el 19, en el sitio Alto de la Virgen entre La Quebrada y Argelia, más adelante de donde habían sido detenidos por los militares, las autoridades encontraron, baleados, los tres cadáveres. El dinero no apareció.

Tras el hallazgo de los cuerpos pero no del dinero, los familiares de Lopera expresaron sus sospechas de la implicación de los militares en el crimen y solicitaron una investigación penal. El entonces comandante de la IV Brigada, general Eduardo Herrera Verbel, ordenó una investigación disciplinaria.

Implicados

El primer implicado fue el capi-

tan Diego Fernando Fino

Rodríguez, a quien el 13 de abril del mismo año un Juzgado de Instrucción Penal Militar le dictó medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, por considerar que los hechos no tuvieron relación con las funciones del servicio.

Al día siguiente fue vinculado a la investigación el mayor David Hernández Rojas, quien estaba al mando de las tropas en el área y momento del asesinato. Quedó bajo detención preventiva en las instalaciones de la IV Brigada en Medellín.

El 27 de abril, la Fiscalía dictó medidas de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación con-

tra los dos oficiales por homicidio agravado, hurto calificado y agravado y falso testimonio.

Por los mismos hechos, el 14 de mayo fueron capturados un sargento y tres soldados. Otro soldado fue detenido el 23 de junio.

En la mañana del domingo 26, el mayor David Hernández Rojas se fugó de la IV Brigada, en extrañas circunstancias. Lo propio haría el 11 de marzo de 2000, justo un año después del crimen, el capitán Diego Fernando Fino Rodríguez, quien se escapó de su sitio de prisión en una guarnición militar de Rionegro, en compañía del cabo primero Carlos Arturo Hernández Ossa, decaído por tráfico de armas, y de un soldado encargado de custodiarlos.

Confesión

El 26 de junio de 2000, dos

soldados sindicados de haber disparado contra el asesor de paz y sus dos acompañantes, confesaron haber recibido órdenes del mayor David Hernández Rojas \$25 millones cada uno, por cometer el crimen. La Procuraduría ordenó la destrucción del mayor y del capitán Fino Rodríguez, quienes al parecer se habían vinculado a las Autodefensas del Magdalena Medio.

Ese mismo día se conoció que la familia de Lopera había abandonado la ciudad, amenazada por su persistencia en intentar que se esclareciera el crimen.

El 29 de junio de 2001, los dos exoficiales prófugos, sentenciados como reos ausentes a 50 años de prisión por los crímenes en cuestión, apelaron la sentencia a través de sus abogados.